

DESDE EL CAMPUS

Ivonne Melgar

DEMANDA DE ESTUDIOS SUPERIORES: PROBLEMA NACIONAL

Cuando para respiro de las autoridades educativas del país, el asunto de los rechazados se reducía a una grilla doméstica de supuesta competencia exclusiva a la UNAM (por algo citaron tanto su autonomía), saltó otra evidencia de que la falta de respuesta a la demanda de estudios superiores es ya un problema nacional.

Y es que si bien desde hace por lo menos cinco años, los no aceptados en la Universidad Autónoma Metropolitana suman 30 mil, en la coyuntura el reducido número de 5 mil alumnos de nuevo ingreso materializó la distancia entre la cobertura real y la potencial.

Además, si en el caso del bachillerato, al menos en cantidad —por que la calidad está en duda en términos de valoración social y laboral—, todos los excluidos de la UNAM encontrarán acomodo en otras instituciones públicas de enseñanza media superior, para los de licenciatura esto resulta imposible.

No obstante que, en los inicios del problema, la SEP argumentó que al igual que para los egresados de secundaria, la demanda de estudios superiores era "artificialmente excesiva", pues en realidad los aspirantes solicitaban ingreso en más de una institución.

Lo cierto es que tan sólo el número de demandantes a la UNAM rebasaba en casi 7 mil a la cifra de 66 mil lugares que integran la oferta en el DF. Corrió el tiempo, y con él llegó la evidencia que faltaba. Una vez que, en el IPN y en la UNAM, los jóvenes capitalinos agotaron sus posibilidades, un buen porcentaje intentó incorporarse a la UAM. Al no lograrlo tampoco acá, ¿qué les queda? El inapelable, y por el momento, mote de excluidos.

Para esos 30 mil no hay lugar. Se dirá que pueden ser antropólogos, normalistas, pedagogos, elementos de la Fuerza Aérea, nutriólogos, archivistas o eternos deudores de una universidad privada; es decir, que todavía pueden pertenecer a otras instituciones.

Pero mientras nuestra estructura productiva y de empleo, así como de valoración social hacia los oficios y diversos campos del conocimiento, siga siendo de corte liberal, las universidades de modelo tradicional y públicas seguirán siendo las más demandadas. Y a sus rechazados les estará negada la formación profesional.

Sin embargo, el problema del rechazo incluye también a las nuevas opciones monitoreadas por las políticas de la SEP. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla sólo se aceptó a 44 por ciento de los solicitantes, pese a que habla cupo para 20 por ciento más. Pero no todos cubrieron a cabalidad los requisitos.

Así, la situación genera un círculo vicioso de inequidad frente al cual resulta socialmente injusto limitarse a señalar que "ni modo, si son burros, que no estudien". Exliquémonos: las instituciones tienen el derecho de seleccionar a los mejores aspirantes; ésa es una vía para elevar la calidad de sus procesos y resultados.

Mas si para los estándares de los principales centros de estudios, arriba de 30 mil jóvenes —y léase que nos referimos sólo al caso de la capital del país, aunque éste hoy se reproduce al menos en una decena de estados— están reprobados, habría que demandar, y sin duda reprobar de paso, a los bachilleratos que supuestamente no sólo les impartieron edu-

cación media superior, sino que además les expidieron certificados que avalan que sus portadores poseen los conocimientos y las habilidades que dicho nivel de estudios requiere.

De manera que al margen de la incongruencia entre certificación y desempeño escolar, el asunto de la demanda no puede soslayarse más.

En palabras del rector de la UNAM, José Sarukhán, "es una bomba de tiempo" que si no estalla hoy, lo hará el próximo o el siguiente año. "Es un problema que llegó para quedarse". Sus respuestas, definió, deben ser nacionales, sustentadas por una decisión de Estado que en el gobierno tendría al principal activador del proyecto; con la participación de la ANUIES y todas las instituciones del país.

Así, si el cañón de los rechazados se intentó colocar hacia la UNAM, tanto su rector como la realidad ahora subrayada por el caso de la Metropolitana lo voltearon hacia las autoridades educativas, quienes en *top secret* desde la Subsecretaría de Luis Llorente Báez levantan entre las universidades públicas una especie de censo acerca de cuántos lugares podrían habilitarse para la desatendida demanda.

Al parecer la administración unamita mostró ya una de sus cartas, aunque el juego de ésta sea político, pues el día en que la UNAM erradique a los artículos 19 (y con él la posibilidad de fosilización de su alumnado) será porque un nuevo pacto de correlación de fuerzas la salvó por fin de los vaivenes externos.

La segunda carta unamita, de mayor viabilidad, es ampliar la matrícula, pero restructurándola, al acotar el crecimiento de las carreras económico-administrativas y aumentar las científicas.

¿Cuáles son las cartas de la SEP? Los proyectos, enagotados, existen: una cuarta unidad de la UAM, una universidad abierta. Y antes, por supuesto, la formación de nuevos maestros. Es decir, que se necesita, ante todo, voluntad y mucho *money money*.

Dimensiones de la desigualdad educativa en el nivel superior

En México, la cobertura nacional de educación superior (para los de 20 a 24 años) era de 13.8 por ciento en 1990, es decir por abajo del promedio de los países no desarrollados. Y, a pesar de la expansión reciente de oportunidades en materia de educación superior, en 1990 seguíamos siendo un país con enormes desigualdades

Humberto Muñoz García

En la actualidad se reconoce a la enseñanza y a la investigación en las instituciones de educación superior como tareas fundamentales de la sociedad. En un mundo internacionalizado, en el que avanza a pasos agigantados la producción de conocimiento, ningún país puede aspirar al progreso, a la cultura y a la democracia sin

un sistema de educación superior renovado y con un funcionamiento adecuado para satisfacer las aspiraciones y expectativas escolares de la población. En la literatura especializada se ha probado que existe una correlación estrecha entre las inversiones que se dedican a este nivel educativo con el desarrollo, sobre todo en países como el nuestro, a juzgar por las experiencias que han tenido otros de similar condición. Los mexicanos de hoy nos encontramos en una encrucijada histórica en la que o dedicamos esfuerzos y recursos a la educación superior, o corremos el riesgo de quedar rezagados en la globalización.

Para apreciar mejor estas ideas analicemos información sobre el panorama educativo superior que resalta las desigualdades existentes entre países, para después hacer mención a aquellas que se refieren a México. Este año la UNESCO publicó un Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior en el que se aprecia un escenario mundial caracterizado y con tendencias de una profunda inequidad.

En el mundo, entre 1960 y 1980, hubo un aumento en las proporciones de la matrícula a nivel superior para el grupo de edad de 18 a 23 años, pero después de la última fecha y hasta 1991 esta proporción se estancó con un parámetro que permaneció en 18.8 por ciento. Al mismo tiempo, en los países altamente desarrollados la matrícula creció casi tres veces en 30 años (1960-1990) para ubicarse en el orden de 40.2 por ciento de atención a la demanda, mientras que en los no desarrollados sólo creció el doble, para situarse en 14.1 por ciento. Las proyecciones que se manejan en el documento para el año 2025 indican que la tasa de atención entre estos dos



Foto: Alberto Carrillo

tipos de países representará una brecha mayor, ya que en los primeros el nivel de atención podrá llegar a casi 50 por ciento mientras que en los segundos experimentará un decremento sustancial para colocarse en cerca de 10 por ciento. Si el conocimiento y los recursos humanos que se producen en las universidades se han tornado cruciales en la estratificación mundial, países como el nuestro estarán en una posición relativa cada vez más desventajosa para contar con personas formadas para crear, recibir y aplicar avances científicos y tecnologías en la boga.

En México, la cobertura nacional de educación superior (para los de 20 a 24 años) era de 13.8 por ciento en 1990, es decir por abajo del promedio de los países no desarrollados. Y, a pesar de la expansión reciente de oportunidades en materia de educación superior, en 1990 seguimos siendo un país con enormes desigualdades. Sólo para ilustrar el punto recurriremos a un análisis comparativo a nivel regional hecho en el programa de Educación y Empleo que se lleva a cabo en la UNAM. En dicho estudio se muestra que para la población de 18 años y más, en la región Centro Sur (Distrito Federal, Estado de México y Morelos) había una cobertura de 37 por ciento de las personas que estudiaron cuatro años de educación superior y 40.1 por ciento de posgraduados, lo que representa los mayores índices de concentración relativos a subbase demográfica en el país. En contraste, en la región del Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) las proporciones son de 4.7 y 3.4 por ciento respectivamente, con índices de concentración muy bajos respecto a la población total del tramo de edad referido en la zona.

Así las cosas, insistiré una vez más en un punto: necesitamos una política educativa que amplíe las oportunidades de estudio en el nivel superior, evite que se abran mayores distancias entre México y los países con los que compete, y promueva un mayor equilibrio interno para que los mexicanos que viven en las regiones más desfavorecidas no permanezcan excluidos de la modernización. Aliguemos conciencia y actuemos para que, en efecto, la educación superior sea una altísima y constante prioridad del gobierno de la República.